

Mane Cárcamo

**E**l rector del Inacap, Lucas Palacios, ha dicho que “en Chile sufrimos de «universitis»”. Lo suyo es una crítica al presente, pero en especial, al futuro de la educación superior en el país. Pensando en esto último, el exsubsecretario de Obras Públicas y exministro de Economía de Sebastián Piñera, alerta sobre las consecuencias que —según él— tiene el proyecto de ley del Gobierno que busca reemplazar al Crédito con Aval de Estado (CAE), iniciativa que hace unos días fue aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara.

En su análisis el nuevo sistema, denominado FES (Financiamiento Público para la Educación Superior), podría dañar seriamente el financiamiento de universidades e institutos profesionales. Claro y con un tono pedagógico, aquí reflexiona sobre los modelos internacionales, aboga por una educación técnica más fuerte y se adentra en la crisis que atraviesan las universidades chilenas, dejando claro que el rumbo actual podría no ser el más adecuado para los estudiantes ni para el sistema en su conjunto.

—Unas de las preocupaciones de las autoridades del mundo académico es el déficit que está generando la política de gratuidad. ¿Cuál es tu visión?

—En el sistema de educación superior en Chile se está acercando una crisis. Se ha puesto un foco muy importante en la equidad de acceso, lo que se ha traducido en un incremento explosivo en la matrícula de educación superior, pero hemos descuidado los procesos y los resultados. Allí, vemos que la subocupación de la fuerza laboral —que básicamente es la sobrecualificación de un porcentaje muy significativo de ella— también está creciendo muy explosivamente: hoy representa cerca del 23% del total de la fuerza laboral. Esto ocurre porque existe mucha heterogeneidad en la calidad de las instituciones de educación superior. Muchas de ellas entregan títulos que, finalmente, no permiten ejercer la profesión, lo que genera una enorme frustración. Además, desde el punto de vista financiero, muchas instituciones no se van a poder sostener; primero, por un cambio demográfico. Es decir, la matrícula total está llegando a su punto máximo y después va a empezar a disminuir. Segundo, hay un aumento de costos que no están recogidos en los aranceles regulados. En paralelo hay una disminución del aporte privado al financiamiento. Ahora, lo que está ocurriendo en Chile es lo que sucedió en países desarrollados hace 40 años.

**“Hay un déficit de 700 mil técnicos profesionales”**

—¿Crees que hay riesgos estructurales en el financiamiento de los planteles de educación superior?

—Un sistema de educación superior complejo como el chileno no tiene posibilidad de sostenerse financieramente en el



FOTOGRAFÍA: CLAUDIO CORTÉS

Lucas Palacios:

## “La educación superior no tiene posibilidad de sostenerse financieramente”

El rector del Inacap señala que “en el sistema de educación superior en Chile se está acercando a una crisis”, especial por los resultados que está generando la política de gratuidad.

largo plazo, ni menos si depende exclusivamente de recursos del Estado, que son cada vez menores. Podemos revisar varios ejemplos internacionales, como el de Australia, en donde hace 40 años se dieron cuenta de que no podían mantenerlo solamente con recursos del Estado y encontraron una manera eficiente, con incentivos bien colocados, para que el financiamiento privado también pudiera colaborar. En el caso de Europa, en Alemania y Francia, se puso un mayor foco en la educación técnico-profesional, porque es la que genera mejores resultados.

—Has hablado de la “universitis”, como una enfermedad de todo el siste-

ma educativo.

—El 45% de la matrícula de educación superior en Chile corresponde a la formación técnico-profesional. Sin embargo, culturalmente seguimos asociando la educación superior exclusivamente con la universidad. La tendencia internacional, en cambio, apunta a poner un mayor foco en la educación técnico-profesional, porque son carreras más cortas y absorben de mejor manera los avances tecnológicos y las innovaciones que están transformando el mundo. Si observamos lo que ocurre en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Japón, vemos un crecimiento sostenido en este tipo de



formación, a diferencia de la educación universitaria. Un dato no menor es que en Chile las carreras universitarias duran, en promedio, 6,3 años, y con resultados muy disímiles debido a la heterogeneidad de las instituciones. Entonces, ¿qué le vamos a exigir a la educación superior? Hasta ahora, el foco ha estado puesto en el acceso, pero ya deberíamos comenzar a exigirle resultados, porque la productividad del país está estancada desde hace cerca de 15 años, pese al incremento explosivo en la matrícula de educación superior.

—**Hablabas de la subocupación de la fuerza laboral.**

—Sí, es que la subocupación sigue creciendo y el sistema no está logrando convertirse en un verdadero vehículo de movilidad social. Es decir, la educación superior no termina con la titulación, y es ahí donde falta mucho foco. De hecho, en Chile hay un déficit de entre 600 mil y 700 mil técnicos y técnicas profesionales.

—**Una cosa es mostrar datos sobre empleabilidad o ingresos, pero lo cierto es que la educación técnico-profesional sigue siendo vista, muchas veces, como el “patio trasero” de la universidad. ¿Cómo se revierte esa percepción tan arraigada?**

—En Chile se piensa que, para ser exitoso en la vida, hay que tener un título universitario. Falso. Uno es exitoso en la medida en que puede desarrollar lo que le gusta y tiene posibilidades reales de hacerlo, de acuerdo con las condiciones del país. Esa lógica ya no existe en gran parte del mundo, pero en Chile sigue fuertemente arraigada la idea de que el éxito pasa por tener un título universitario, independiente de la calidad de la universidad. Esto es un grave error, porque lleva a muchos estudiantes a tomar decisiones desinformadas respecto de qué les conviene o cuál es el camino que los va a llevar a realizarse como personas. Ahora bien, esto ya está empezando a cambiar. Si bien el 45% de la matrícula total de la educación superior corresponde al sistema técnico-profesional, en los últimos siete años la matrícula de alumnos nuevos ha crecido más rápidamente en ese sistema que en el universitario. Es decir, en los hechos ya se está comenzando a romper ese prejuicio. Pero eso, lamentablemente, eso no se ve reflejado en la política pública: en los aranceles regulados de esta última pasada, hubo un desmedro de 61.500 millones de pesos para el sistema técnico-profesional, mientras que el sistema universitario resultó beneficiado con 36.300 millones de pesos.

—**Nadie parece estar conforme con la propuesta de aranceles regulados que propuso el Ejecutivo. La crítica es más o menos la misma: los montos estatales no alcanzan a cubrir los costos reales de cada carrera. ¿Ocurre lo mismo en tu sector?**

—Efectivamente, el proceso de fijación de aranceles tiene metodológica y estadísticamente muchos problemas. Por de pronto, no absorbe o no recoge

las inversiones que son muy necesarias, sobre todo en el sistema técnico-profesional, donde existen talleres y laboratorios que deben incorporar los cambios tecnológicos que cada vez son más profundos y significativos. Si vemos el aporte que hace el Estado por alumno a aquellas instituciones que están adscritas a la gratuidad —que son 69—, vemos que al año la subvención por estudiante universitario es de \$3.300.000 pesos y de \$1.100.000 en el caso de las instituciones técnico profesionales. Eso no se condice con los resultados que ambos sistemas logran. Porque si observamos la movilidad social, la pertinencia, la productividad —que es algo tan necesario en Chile para que volvamos a crecer fuerte y generar oportunidades—, eso lo vemos en la educación técnico-profesional, porque es la que tiene que estar más ajustada a las necesidades propias de cada región.

—**“Tengo buena opinión del subsecretario Orellana”**

—En una entrevista mencionaste que “el Ministerio de Educación llevaba décadas secuestrado por las universidades”. Es una crítica dura.

—El Ministerio de Educación intenta dar una visión de más de largo plazo. Pero en Chile estamos envidiados de cortoplacismo y de problemas coyunturales que impiden que podamos tener políticas públicas con visión más amplia. Y efectivamente, el Ministerio de Educación está presionado desde hace décadas por grupos de interés que pugnan por mayores recursos. Pero el objetivo de la educación superior no es la sostenibilidad económica de las instituciones, sino el impacto que genera en sus estudiantes, en sus familias y en el desarrollo del país. Es ahí donde estamos muy atrasados y esta es una crisis que va a comenzar más temprano que tarde. De hecho, el año pasado ya hubo 20 instituciones de educación superior que presentaron a la Comisión Nacional de Educación sus procesos de cierre.

—**En CNN hablaste positivamente del subsecretario de Educación, Víctor Orellana. ¿Crees que has logrado que escuche las demandas del sector que representas?**

—Tengo una buena opinión del subsecretario Orellana, pero enfrenta presiones que conspiran contra la posibilidad de diseñar una política pública con visión de largo plazo. Son presiones económicas, especialmente desde los grupos que representan a las universidades más tradicionales. Creo que hay una presión muy fuerte por parte de las universidades estatales, a pesar de que dentro de ese grupo existe una gran heterogeneidad en términos de calidad y eficiencia. Él intenta cuadrar un círculo muy complejo, pero sí percibo que tiene una visión de largo plazo: entiende que la educación superior debe ser una plataforma para la movilidad social, para la descen-



Los estudiantes toman sus decisiones ciegas respecto a su futuro laboral”.



En Chile sigue fuertemente arraigada la idea de que el éxito pasa por tener un título universitario”.

tralización del país y para proyectar las aspiraciones personales hacia el futuro. Lo que falta, a mi juicio, es que el Ministerio de Educación tenga realmente la libertad para traducir esos objetivos en una política que sea sostenible tanto en lo económico como en sus resultados.

—**Muchas de las críticas al FES se concentran en que una mayor injerencia del Estado en el financiamiento de la educación superior tensiona la autonomía de las instituciones, su libertad de enseñanza, su ideario, e incluso sus decisiones de inversión. ¿Crees que esta presencia estatal podría poner en riesgo esa independencia?**

—Un sistema caro como el que tenemos —en donde gastamos 2,4 puntos del PIB, lo que lo sitúa como el país que invierte el mayor porcentaje del PIB en educación superior— y que no está dando los resultados adecuados, nos obliga a preguntarnos varias cosas. Lo primero: los países desarrollados que han resuelto estos problemas no han prescindido del financiamiento privado, han buscado una manera de que las familias puedan aportar. Segundo, han disminuido las duraciones de las carreras; pero un sistema que fija aranceles y que los paga de acuerdo a la duración de la carrera no coloca los incentivos adecuados para que las carreras duren menos. También hay que exigir pertinencia y empleabilidad a las instituciones, sobre todo respecto a algunas carreras. Evidentemente, hay algunas carreras que quizás no tienen demasiada empleabilidad y que se mueven por un tema vocacional sobre todo, pero es muy importante entonces que el estudiante conozca esa realidad: ¿cuáles van a ser las condiciones laborales que va a tener hacia el futuro? ¿Cuál va a ser la renta promedio que se está pagando en el mercado para poder ejercer esa actividad? Esa información hoy en día no se entrega. Los estudiantes toman sus decisiones ciegas respecto a su futuro laboral.

—**¿No es una contradicción respecto a lo que es la universidad y cómo la entendemos?**

—Depende de las carreras que se dictan y de la investigación y la vinculación con el medio que realizan. Hay muy buenas y grandes universidades, y también institutos profesionales y centros de formación técnica que lo hacen de forma muy positiva. Te quiero puntualizar que en Inacap nosotros hacemos una inversión gigantesca en vinculación con el medio, en investigación aplicada y en perfeccionamiento. Hay muchas universidades que pueden ser docentes; por ejemplo, universidades pequeñas que no tienen la escala como para poder invertir en vinculación con el medio, en investigación y que a lo mejor no se les debe exigir la complejidad. Eso ya se ha resuelto en distintas partes del mundo: existen universidades complejas y sólo docentes. Pero en Chile, todas las instituciones de educación universitaria tienen que ser complejas. Y eso es muy caro